



Mariano Rajoy ha iniciado el año con las cuentas públicas prorrogadas.

Acaba de arrancar otro año difícil para Mariano Rajoy que reproduce en buena medida lo ocurrido en 2017. Más allá del omnipresente problema catalán, cuya reedición se ha puesto en marcha tras el 21-D, 2018 se estrena con los PGE prorrogados, lo que implica no poder asumir compro-

misos nuevos que demuestren, tal y como mantiene el Ejecutivo, que España ha superado la crisis. "Pondré todo mi empeño para poder aprobar lo antes posible las cuentas públicas", decía Rajoy sabiendo lo mucho que se juega. Nada más y nada menos que agotar o no la legislatura.

Rajoy quiere garantizar la gobernabilidad incluso sin Presupuestos y con el desafío catalán, de nuevo, en plena efervescencia

Objetivo, salvar la legislatura

■ Ana Sánchez Arjona

El presidente del Gobierno se enfrenta a un año difícil, otra vez. No sólo por el omnipresente problema catalán, revitalizado por el triunfo en escaños del bloque secesionista del 21-D, sino también porque acumula un importante retraso legislativo desde 2015: primero por la tardanza en poder formar Ejecutivo, lo que impuso un largo periodo de gabinete en funciones con las manos atadas y, segundo, por la dificultad de avanzar desde la investidura con una mayoría minoritaria en el Congreso.

El Gobierno afronta así un ejercicio para el que no hay tan siquiera unos Presupuestos aprobados, tal y como ocurrió en 2017. Este será uno de los principales objetivos a alcanzar. No será fácil porque, al margen de las necesidades innegables de la nación, entrará en juego el regate en corto de las fuerzas parlamentarias.

Este año se ha iniciado con las cuentas del Estado prorrogadas, lo que implica no poder asumir compromisos nuevos que demuestren, tal y como mantiene el Ejecutivo, que España ha superado la crisis y empieza una etapa de redistribución de riqueza y oportunidades.

A punto de retomar los contactos con las cuentas ya prorrogadas por sexta vez desde que se aprobó la Constitución en 1978, las negociaciones se iniciarán de inmediato, según ha anunciado el propio Mariano Rajoy pero se presentan complicadas. El Gobierno del PP se juega mucho. Nada más y nada menos que agotar o no la legislatura. Si no lo supera es más que probable que acabe imponiéndose la hipótesis de un adelanto electoral.

"Pondré todo mi empeño para poder aprobar lo antes posible las cuentas públicas" decía Rajoy mientras instaba a las distintas formaciones políticas a hacer un "ejercicio de responsabilidad" para renovar los pactos y poder sacar adelante las cuentas públicas de 2018.

La crisis catalana y la aplicación del artículo 155 hizo que los nacio-

nalistas vascos se negarán a seguir con las reuniones para negociar los presupuestos hasta que se despejase el escenario en Cataluña. Hasta que no se forme gobierno y se desactive el 155, el PNV no volverá a sentarse a la mesa. De momento, tiene asegurado el respaldo de Ciudadanos, siempre que cumpla con las condiciones del preacuerdo alcanzado con la formación naranja.

Las conversaciones con Ciudadanos están muy avanzadas y nunca se han detenido, a diferencia de lo ocurrido con el PNV. La aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, y con ello la disolución del Parlament y el cese del Gobierno autonómico, interrumpieron abruptamente las conversaciones de los nacionalistas vascos

con el Gobierno central. Estos vinculaban el apoyo a las nuevas cuentas con la no intervención del Gobierno en la autonomía catalana. "Con el PNV y el presidente Urkullu voy a hablar de presupuestos y le voy a dar razones de por qué su aprobación es buena para los ciudadanos vascos", manifestó Rajoy en la rueda de prensa de fin de año.

Algunas cuestiones han aproximado a los vascos a una negociación de los Presupuestos: la aprobación del Cupo además de los compromisos alcanzados sobre infraestructuras

El entorno de Rajoy cree que algunas cuestiones han aproximado a los vascos a una negociación de los Presupuestos: la aprobación del cupo vasco por el Gobierno de Rajoy, además de los compromisos alcanzados sobre infraestructuras con el Gobierno de Iñigo Urkullu. Otra razón para creer que el acuerdo será posible viene dada por el apoyo que prestó hace no hace un mes el PP a los presupuestos del Gobierno vasco para 2018 y que son posibles por el acuerdo con el PSE-PSOE y la abstención de los populares vascos, encabezados por su presidente, Alfonso Alonso.

Con el mismo objetivo de salir del atolladero catalán, Rajoy se dispone a levantar el pie del freno de algunas reformas aplazadas, así como

de otras ralentizadas en comisiones creadas en el Congreso.

Esos serán los casos del pacto sobre pensiones y el de educación, así como la ampliación del de violencia de género. Antes de marcharse de vacaciones, el presidente viajó a Murcia para presentar un plan de infraestructuras e inaugurar una obra muy emblemática de un puente en Galicia. Habrá más acciones en ese sentido.

Esta nueva estrategia tiene otra explicación. Coincide con la decisión de los partidos políticos en la oposición de emprender una ofensiva legislativa y de control al Gobierno desde comienzos de año.

Un comienzo de año en el que Soraya Sáenz de Santamaría, ha estudiado con los ministros las leyes que deben salir adelante si los pactos se consolidan.

Actividad legislativa

El Gobierno pretende aprobar en 2018 nueve leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 240 reales decretos, lo que supone multiplicar la actividad legislativa del Ejecutivo con respecto a 2017. Entre las nuevas iniciativas destacan el impulso de la Ley de protección contra la violencia de género; de la Ley de menores sin alcohol; de la Ley de cambio climático; o de la Ley sobre el registro de nombres de los pasajeros para combatir el terrorismo. También se modificarán los códigos civil, penal y mercantil, la ley de enjuiciamiento civil, la del Poder Judicial, o la del impuesto de sociedades. Finalmente, se tramitará el reglamento de la Ley de Transparencia. Tres datos reflejan lo ambicioso que es el proyecto para un Gobierno en minoría: el Congreso no ha aprobado ninguna ley orgánica ni ningún decreto legislativo en 2017, y solo ha dado el visto bueno a nueve leyes.

"Algunas iniciativas se materializarán en leyes o no según los acuerdos con otros grupos", explicaba Soraya Sáenz de Santamaría en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros a mediados de diciembre. "Iremos operando como hasta la fecha. Una vez elaboradas las normas, o en proceso de elaboración, las hemos ido compartiendo con los grupos parlamentarios para ver si teníamos su apoyo", ha seguido. "Procuramos que cuando el proyecto de ley va a salir del Consejo de Ministros tengamos ciertas garantías de que a prosperar su toma en consideración en el Congreso. Así lo haremos"

Abandonar la tutela de Bruselas

■ A pesar de que no hay Presupuestos, de momento, para este año que acaba de comenzar, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere alcanzar uno de los grandes hitos de la legislatura de la mano de uno de sus ministros más fieles, Cristóbal Montoro. Se trata de la salida de España del control especial presupuestario de Bruselas por primera vez en nueve largos años. Y para que eso pueda ser así, la recaudación récord de impuestos y el superávit de los ayuntamientos en 2017 están resultando claves. Según los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, los ingresos

procedentes de impuestos, tanto IRPF como IVA, están creciendo a un ritmo del 5% a punto de concluir el año. En cuanto a los ayuntamientos, controlados por la regla de gasto, registran un superávit hasta finales de septiembre de 5.919 millones, equivalentes al 0,51% del PIB. «Supone un aumento del 11,2% respecto al tercer trimestre de 2016, equivalente a 594 millones. Esta evolución se debe a un aumento de los ingresos del 2,7%, destacando los impuestos, que crecen en un 4,4%, frente a un incremento de los gastos», subraya el Ministerio de Hacienda



Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

en un comunicado. El déficit del Estado a finales de noviembre cae un 35,1% con respecto al mismo periodo del pasado año y tanto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, apuntaron ayer

que con este dato está muy próxima la salida del control especial de Bruselas. Para ello no basta con cumplir el objetivo previsto de déficit del 3,1% con respecto al Producto Interior Bruto, sino bajar al 3%. Lo previsto ahora es que

esta primavera se oficialice la salida de España del procedimiento, un año antes de lo acordado inicialmente. El Gobierno no espera que el pasado diciembre, del que aún no hay datos cerrados, anuncie desequilibrios de última hora.